

NEW LEFT REVIEW 149

SEGUNDA ÉPOCA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024

ARTÍCULOS

ANTON JÄGER	Hiperpolítica, USA	7
PERRY ANDERSON	Fredric Jameson	21
FREDRIC JAMESON	<i>Agón: La Ilíada</i>	43
MARC ANDRÈ	Argelia en los archivos	109
EMILIE BICKERTON	El autor como forajido	129
JEREMY ADELMAN & PABLO PRYLUKA	Transiciones latinoamericanas	151

CRÍTICA

EMMA FAJGENBAUM	El defensor del imperio	179
NIC JOHNSON	La sobreabundancia de riquezas	191

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)



SUSCRÍBETE

ts
traficantes de sueños



MARC ANDRÉ

LA GUERRA DE ARGELIA EN LOS ARCHIVOS FRANCESES

SI «LA GEOGRAFÍA sirve ante todo como un medio para la guerra», en la famosa observación de Yves Lacoste, entonces lo mismo puede decirse sobre los archivos estatales¹. Como evidencia, solamente hace falta fijarse en las batallas sobre la documentación que han tenido lugar durante la Guerra de Independencia de Argelia. A lo largo de la misma, los militares, la policía y los funcionarios judiciales recolectaron, clasificaron e inventariaron un vasto tesoro de documentos, armando pacientemente con los materiales resultantes de registros, detenciones o requisas lo que las propias autoridades denominaron unos «archivos», que se utilizaron inmediatamente. Enviados entre departamentos, expedidos desde comisarías de policía y tribunales a prefecturas y ministerios, estos documentos transmitían información y reconstruían vínculos, siendo tratado su contenido con el máximo secreto². Entre 1954 y 1962, estos documentos fueron publicados por la prensa o resguardados de la opinión pública, dependiendo de que favorecieran u obstaculizaran lo que actualmente se llamaría «los intereses de la seguridad nacional» o expresado en los términos de Richelieu, la *raison d'État*.

Al mismo tiempo, quienes se oponían a la guerra, como el historiador Pierre Vidal-Naquet y sus camaradas del Comité Audin, se afanaban en recoger febrilmente documentos confiados por abogados, reclutas o altos

¹ Yves Lacoste, *La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre*, París, 1976; ed. cast.: *La geografía, un arma para la guerra*, Madrid, 1977.

² Los funcionarios hablaron a menudo de sus «archivos» y la utilización que podía hacerse de ellos en tiempos de guerra, no solo rastreando a militantes de la Organización del Ejército Secreto (OAS). Véase, por ejemplo, Archives Nationales (AN) F-7-15646, Ministerio del Interior, Dirección de Servicios de la Policía Judicial, nota a la atención del director general de la Seguridad nacional, 31 de enero de 1961.

funcionarios implicados en operaciones policiales o militares, lo cual les permitió publicar evidencias de innumerables crímenes de Estado, mentiras y encubrimientos oficiales gracias a un puñado de editoriales y publicaciones, legales o semiclandestinas. Como más tarde señalaría Vidal-Naquet, su negativa a transigir impulsó una decidida búsqueda «del tipo de documentos que yo no quería que se descubrieran en los archivos únicamente cincuenta años después de haber sido depositados en los mismos»³.

Pero los archivos también sirven, dese luego, como un medio para escribir la historia o para descubrir los orígenes personales de cada cual, cuando han estado ocultos por el rechazo público o el silencio familiar. Esa investigación puede verse obstaculizada cuando afecta a la actual *raison d'État*. Esta vez, como evidencia, podemos señalar las recientes batallas sobre el acceso a los archivos de la Guerra de Argelia. Desde 1979 el criterio ha sido que todos los archivos públicos debían ser accesibles después de que hubiera pasado un cierto periodo de tiempo. Sin tener que volver a los recurrentes y necesarios debates alrededor de los archivos «prohibidos», «secretos», «sensibles» o «conflictivos»⁴, desde principios de la década de 2000 las solicitudes especiales de acceso han sido generalmente concedidas. Pero a medida que han crecido las tensiones globales, ha surgido una nueva lucha en la que los progresos en el acceso han quedado sistemáticamente desmentidos por determinados efectos bumerang, algunos flagrantes, otros más sutiles.

En septiembre de 2019 el gobierno de Macron anunció que los archivos de Maurice Audin y otros «desaparecidos» durante la Guerra de Argelia serían accesibles; en abril de 2020 esto se extendió a los documentos cubiertos por la Commission de Sauvegarde des Droits et Libertés Individuelles, creada en 1957 por el gobierno de Guy Mollet para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra de Argelia por la policía y el ejército franceses y disuelta en

³ Pierre Vidal-Naquet, *Face à la raison d'État: Un historien dans la guerre d'Algérie*, París, 1989, p. 20. En 1958 Éditions de Minuit publicó la obra de Vidal-Naquet *L'affaire Audin*, una investigación sobre la tortura y muerte del joven matemático y miembro del PCF Maurice Audin en Argelia a manos del Primer Regimiento Paracaidista.

⁴ Véase *inter alia*, Sonia Combe, *Archives interdites: L'histoire confisquée*, París, 2001; Sébastien Laurent (ed.), *Archives «secrètes», secrets d'archives? Historiens et archivistes face aux archives sensibles*, París, 2003; Stéphane Péquignot y Yann Potin (eds.), *Les conflits d'archives: France, Espagne, Méditerranée*, Rennes, 2022.

1963. Esta apertura fue inmediatamente contrarrestada no obstante por la reaparición de la Instrucción General Interministerial, IGI 1300, un viejo monstruo marino de las profundidades de la Guerra Fría que, siguiendo una directiva del secretariado General de Defensa y Seguridad Nacional, repentinamente fue aplicada *à la lettre* a numerosos casos⁵. Ahora, los documentos señalados como «secreto de defensa» tenían que ser formalmente desclasificados por la autoridad competente antes de que pudieran ser consultados, incluso aunque el Code du Patrimoine los hubiera abierto al público. La IGI 1300 levantó un clamor generalizado entre historiadores, juristas y archiveros y en julio de 2021 fue revocada por el Consejo de Estado, el tribunal supremo administrativo francés. Menos de un mes después, sin embargo, se promulgó la nueva *Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement*, de 30 de julio de 2021, que prolongó los retrasos en el acceso a los archivos del servicio de inteligencia, sin posibilidad de recurso, lo cual en la práctica entregaba el poder a la burocracia en contra del legislador⁶. Aunque la Guerra de Argelia no era el objetivo principal de la nueva normativa, se vio inevitablemente afectada por nuevas restricciones de acceso a los mencionados archivos. Para el jurista Noé Wagener, el derecho de acceso a los archivos se había convertido en «un apéndice del derecho antiterrorista», y para Olivier Beaud, también jurista, la razón de Estado se había en cierto modo «legalizado».

A continuación, el gobierno de Macron anunció lo que parecía un verdadero avance: el *Arrêté du portant ouverture d'archives relatives à la guerre d'Algérie*, de 22 de diciembre de 2021, que estipula la «exención general» de los archivos de la policía y los tribunales relacionados con la Guerra de Argelia, permitiendo su accesibilidad a excepción de tres tipos de documentos: los relacionados con menores de la edad legal de 21 años, los que pudieran identificar a informadores u otras personas implicadas en la recogida de información, y los que guardaban detalles íntimos médicos o sexuales. Se argumentaba que estas restricciones servirían para

⁵ El SGDSN es un organismo interministerial dependiente del primer ministro. Los historiadores han advertido desde tiempo atrás sobre los funestos efectos de la IGI 1300, Nathalie Genet-Rouffiac, «De l'esprit des lois... Le cas des documents classifiés au Ministère de défense», en S. Laurent, *Archives «secrètes»*, cit., pp. 71-79.

⁶ Hay una gran bibliografía sobre estas cuestiones, Véase *inter alia*: Olivier Beaud, *Le savoir en danger: Menaces sur la liberté académique*, París, 2021, esp. pp. 227-243; Olivier Forcade, Sébastien Laurent y Bertrand Warusfel, «Archives et politiques du secret. Ramener l'État à la raison démocratique», *Esprit*, junio de 2021; Noé Wagener, «Les glissements du droit d'accès aux archives publiques», *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, vol. 69, núm. 1, 2022.

proteger los derechos de la persona. El anuncio fue recibido con gran fanfarria por los medios, dando la impresión de un gran salto adelante similar al que se había producido en 2015 con los archivos franceses relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Esa generalizada bienvenida fue compartida también por la comunidad académica. Sin embargo, al trabajar de manera detallada con los archivos sobre la Guerra de Argelia, quedó claro que las tres restricciones aparentemente inocuas y que inicialmente pasaron desapercibidas, cerraban eficazmente los documentos de una manera más sutil pero definitiva que la torpe IGI 1300 y la mencionada *Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement* aprobada en julio de 2021. Un análisis más detenido del funcionamiento de estas tres restricciones puede ayudar a constatar la lógica de los dos tipos de *raison d'État* que están en juego en este caso: la *raison d'État* de ayer, sobre la actuación durante la Guerra de Argelia, y la *raison d'État* de hoy, sobre el control de sus archivos.

¿Proteger a la juventud?

En el otoño de 2021, la hija de Salah Khalef —un militante del FLN que había permanecido en silencio sobre su experiencia en Francia durante la Guerra de Argelia, aunque estuviera profundamente marcada por ella— visitó los Archivos Nacionales en Pierrefitte-sur-Seine. No pudo acceder a los dos documentos relacionados con su padre, el primero relativo a una investigación policial y el segundo sobre su solicitud de indulto. Khalef tenía 20 años cuando fue sentenciado a muerte por un tribunal militar en Lyon, el 9 de enero de 1961. Como «menor» en aquel momento, sus archivos quedaban excluidos de la exención general indicada en el *Arrêté* de 22 de diciembre de 2021. Aquí vislumbramos la extraña inversión de valores a través de la cual se reproduce la lógica de la Guerra de Argelia. La juventud de Khalef, debatida en aquel momento en los tribunales y sus órganos internos, no fue ningún obstáculo para su ejecución legal. Examinando el caso ante el comité de apelaciones, las autoridades francesas no tuvieron ninguna intención de revocar la sentencia dictada sobre Khalef, «que dispuso de manera absoluta de las vidas de sus correligionarios a pesar de su juventud, 19 años, debido a sus funciones como jefe regional»⁷. Siendo suficientemente mayor como para comparecer ante un tribunal militar y ser sentenciado a la guillotina en 1961, Khalef había sido reclasificado como «demasiado

⁷ AN 73 PM 61, Recours en grâce de Salah Khalef.

joven» para que su hija pudiera acceder en 2022 a sus archivos; una injusticia refuerza la otra⁸.

La contradicción revela una simple realidad histórica: la Guerra de Argelia fue librada por gente joven⁹. Más de una quinta parte de los juicios celebrados ante el tribunal militar de Lyon entre 1958 y 1962 implicaban a acusados menores de 21 años y el 13 por 100 implicaba a jóvenes de 22 años acusados de actos cometidos cuando todavía eran menores. Ya que la nueva «protección» se aplica a la edad del acusado en el momento del supuesto delito, en vez del momento del juicio, más de un tercio de los archivos son inaccesibles. Además, la presencia de un menor en un caso que implique a varios acusados bloquea el acceso a todo el dossier; a la hija de otro prisionero condenado a muerte por el tribunal militar se le denegó el acceso al expediente de su padre no porque él fuera menor de 21 años, sino porque uno de sus compañeros sí lo era.

Excluir los documentos sobre los menores de 21 años también niega la capacidad de compromiso de estos jóvenes. Un caso importante es el de Djamila Bouhired, la militante del FLN torturada por los franceses y condenada a la guillotina por su participación en la lucha, cuyo dossier está bloqueado debido a su juventud en el momento de los hechos. En entrevistas realizadas en la década de 2010, otros antiguos acusados afirmaron su sentimiento de madurez social y política durante la lucha por la independencia a pesar de su juventud biológica. Salah Khalef, que llegó solo a Lyon a la edad de 15 años, señalaba que él era solamente un «chico de 17 años», cuando se sintió atraído por el FLN; pero como un niño que vivió las masacres de Sétif creció deprisa¹⁰. Otro antiguo militante, Abdelkader Kourdoughli, puso en perspectiva su «precocidad»: «Todos los argelinos alcanzaron la madurez antes de tiempo. ¿Por qué? Porque sufríamos. El sufrimiento nos obligó a madurar»¹¹. Cuando Kourdoughli compareció ante el tribunal militar en Lyon el 8 de marzo de 1960, por cargos relacionados con su implicación en la Organización

⁸ Quienes redactaron el *Arrêté* del 22 de diciembre de 2021 aparentemente ignoraban la discrepancia entre la mayoría de edad vigente en el derecho penal, fijada a los 18 años desde 1906, y la edad de mayoría de edad civil, establecida a los 21.

⁹ Ludvine Bantigny, *Le plus bel âge? Jeunes et jeunesse en France de l'aube des «Trente Glorieuses» à la guerre d'Algérie*, París, 2007.

¹⁰ Marc André, «Salah Khalef, un condamné à mort préférant l'histoire à la mémoire», *Une prison pour mémoire. Annexes, sources sonores*, Lyon, 2023.

¹¹ Entrevista del autor con Abdelkader Kourdoughli, Argelia, 5 de noviembre de 2012.

Especial del FLN, el muchacho que entonces tenía 20 años replicó al fiscal que dirigía la acusación: «Lo que usted llama un crimen para mí es un deber nacional»¹². La sentencia fue de diez años de trabajos forzados.

Un militante de 21 años del Movimiento Nacional Argelino (MNA), un grupo menor que rivalizaba con el FLN, declaraba ante un tribunal militar el 24 de abril de 1959: «Argelia ha estado luchando contra el colonialismo desde hace ciento treinta años. En 1945, después de la guerra que Argelia ayudó a ganar, mientras todos los Aliados estaban de fiesta, Argelia estaba de luto llorando por los 45.000 muertos de Sétif»¹³. Las mujeres jóvenes eran igual de inflexibles. Tassadit Rahmouni, que pasó siete meses en la prisión de Montluc a cuenta de sus actividades como enlace del FLN, escribió a su pretendiente en una carta, que fue censurada y encontrada en consecuencia en los archivos: «Asumo la responsabilidad de mis acciones, después de todo tengo 18 años y distinguo el negro del blanco, *baby*»¹⁴. Jóvenes reclutas franceses llamados a filas a la edad de 20 años, sostuvieron enérgicamente su derecho como objetores de conciencia. Michel Hanniet, de 20 años de edad cuando fue acusado de «insubordinación en tiempo de paz», dado que oficialmente no había ninguna guerra, propuso que se le aplicara la sentencia máxima para equilibrar la injusticia de la absolución unos días antes de oficiales del IX Regimiento Zouave, que habían torturado hasta la muerte a una joven argelina¹⁵. Afirmar que estos «menores», ahora octogenarios, requieren protección es un acto de anacrónica infantilización, que se opone netamente a la manera en que su juventud fue denegada por el sistema judicial francés del momento. En una ocasión es cierto que el fiscal tuvo en cuenta «la extrema juventud» de un acusado para pedir al tribunal que dictara «solamente una sentencia de trabajos forzados a perpetuidad»¹⁶. Los abogados podían argumentar ocasionalmente que a «estos jóvenes» se les debería pedir simplemente que admitieran su culpabilidad en vez de afrontar un castigo ejemplar. Sin embargo, en su conjunto, tanto las palabras como las sentencias fueron duras. En el juicio de Ali Mamadi, que tenía 20 años cuando cometió sus supuestos

¹² Publicado en el diario de la ciudad de Lyon, *Dernière Heure Lyonnaise*, 10 de marzo de 1960.

¹³ *Dernière Heure Lyonnaise*, 25 de abril de 1959.

¹⁴ Archives Départementales du Rhône (ADR) 3554W4, dossier no. 77 110. Carta de Tassadit Rahmouni, Montluc, 14 de abril de 1961.

¹⁵ Entrevista del autor con Michel Hanniet, Rouen, 21 de julio de 2018.

¹⁶ *Dernière Heure Lyonnaise*, 22 de septiembre de 1958.

delitos junto a cinco miembros de su grupo, el fiscal pidió al tribunal que «no tuviera misericordia». Todos fueron sentenciados a muerte¹⁷.

Los delitos de la juventud francesa recibirían un tratamiento más benévolo. En septiembre de 1958, por ejemplo, ocho jóvenes entre los 18 y los 20 años fueron acusados en Lyon de asalto y agresión contra «tres musulmanes argelinos». Los periodistas y jueces explicaban las expediciones punitivas contra norteafricanos organizadas por estos «reclutas poco convencionales», aduciendo la «campaña de terror» desatada por la apertura de un segundo frente en la metrópoli por parte del FLN: «Todas las noches se producen daños en las industrias, ataques masivos y agresiones individuales [...]», informaba la *Dernière Heure Lyonnaise* en sus páginas, lo cual estaba fomentando «un extraño clima de vejeción mezclada con miedo», que provocaba al aumento de las tensiones entre lioneses y norteafricanos. En este caso, explicar suponía excusar: los jóvenes salieron del tribunal con una reprimenda¹⁸.

Por último, el *Arrêté* de 22 de diciembre de 2021 sobre la retención de dossieres sobre «menores» sirve para frustrar la investigación sobre las fuerzas policiales, particularmente sobre la Force de Pólice Auxiliaire (FPA), formada por personal argelino y creada por Maurice Papon como prefecto de Policía de París para combatir a los militantes de FLN en la metrópoli¹⁹. Un juicio, ampliamente seguido en su momento, abordaba las realidades de la represión: el 17 de julio de 1960 dos oficiales argelinos de la FPA, acompañados de un alto mando, hicieron una redada en un café marroquí donde se sospechaba que había fumadores de hachís.

¹⁷ *Dernière Heure Lyonnaise*, 24 de mayo de 1960.

¹⁸ *Dernière Heure Lyonnaise*, 27 de noviembre de 1958. Sin embargo, los funcionarios del Estado pueden estar seguros de que la documentación de este juicio no es probable que pueda encontrarse en los archivos, ya que todos los archivos de ese periodo, exceptuando los del año 1956, han sido destruidos. Era más sencillo destruir todo el archivo judicial –conservando solamente como muestra los de los años acabados en «6»– que considerar si este excepcional periodo merecía otra forma de selección.

¹⁹ Sobre la FPA, véase Paulette Péju, *Ratonnades à Paris, précédé de Les harkis de Paris*, París, 2000, ambos textos publicados inicialmente por Maspero en 1961. Maurice Papon (1910-2007), como jefe de policía en Burdeos, fue responsable de la deportación de población judía a los campos de concentración nazis bajo el régimen de Vichy; nombrado bajo los gobiernos de Mendès-France y Mollet, cumplió varios periodos de servicio en Marruecos y Argelia, supervisando la utilización de la tortura sobre la población civil. Nombrado prefecto de Policía de París en 1958, fue responsable de encubrir la masacre de partidarios del FLN en octubre de 1961 y del tiroteo de sindicalistas en el metro de Charonne en febrero de 1962.

La redada estaba fuera de sus competencias y de su jurisdicción y la FPA no había sido creada para enfrentarse al tráfico de estupefacientes. Entrando en el café lanzando gritos de «sucios judíos, raza de perros: todos contra la pared», apalearon a los clientes y le pegaron un tiro a bocajarro en el estómago a uno de ellos²⁰. El juicio, que no se celebró en el tribunal de lo penal competente con la presencia de jurado, como era habitual en casos de intento de asesinato, fue una ocasión para denunciar la realidad tanto de la FPA como del sistema judicial.

Los abogados de las partes civiles denunciaron «la facilidad con que se contrata y armaba a jóvenes para incorporarlos a la policía auxiliar» –los dos oficiales de la FPA eran menores de 21 años– y señalaron la «gran responsabilidad» del propio Papon, ausente en el juicio a sus subordinados. La impunidad fue prácticamente total. El alto mando implicado en la incursión no compareció en el juicio; se le había otorgado un visado urgente para viajar a Argelia, donde dio como dirección el cuartel general del servicio de inteligencia, la Brigade de Surveillance du Territoire (BST). La investigación absolvió a las fuerzas policiales de cualquier delito. Después de la represión del 17 de octubre de 1961, cuando cientos de personas murieron en un ataque policial contra los manifestantes que protestaban por el toque de queda impuesto por Papon a los «trabajadores musulmanes» en París, el prefecto sería acusado de nuevo de instigar y encubrir asaltos policiales incontrolados que, como señaló un abogado, recordaban las redadas realizadas bajo la ocupación nazi y eran igualmente antisemitas²¹.

La exclusión de los dosieres relativos a «menores» ha tenido dos consecuencias: infantilizar a los jóvenes y las jóvenes militantes independentistas, que eran bien conscientes de las consecuencias de sus actos, y proteger a los igualmente jóvenes agentes de la represión, que se movían entre la violencia legal o extralegal y los crímenes de Estado. También ha creado dificultades prácticas para acceder a la totalidad de los dosieres, ya que cada uno de ellos tenía que ser examinado por un archivero antes de que pudiera ser consultado para verificar si se relaciona o no con personas menores de 21 años o si estuviera afectado por alguna de las restantes restricciones introducidas por el *Arrêté* de 22 de diciembre de 2021, aprobada por el gobierno de Macron²².

²⁰ Archives de la Préfecture de Police de Paris (APPP) H63, dossier Émile D.

²¹ *L'Humanité*, 19 de enero de 1962.

²² Sin entrar en demasiados detalles técnicos, conviene recordar que antes de la exención general yo pude hacer un estudio exhaustivo de casi cuatro mil archivos policiales conservados en los Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine relativos

Jerarquía de espías

La segunda exclusión establecida por el *Arrêté* de 22 de diciembre de 2021 —los expedientes que pudieran «poner en peligro la seguridad de personas citadas o fácilmente identificables implicadas en actividades de inteligencia»— evocaba la mencionada *Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement* del mismo año y restringía el acceso a los archivos de los servicios de inteligencia sin recurso de apelación alguno y sin límite de tiempo, lo cual contradecía de hecho el límite de cincuenta años establecido en 1979. Aquí, el imperativo de la seguridad nacional se combinaba con la idea de la privacidad individual para justificar una clausura sin precedentes de los archivos relativos a «procedimientos operativos» y «capacidades técnicas» de los servicios de inteligencia, además de muchos otros que se encontraban bajo la autoridad de los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia. Este vago enunciado otorgaba un amplio margen de maniobra a diversas burocracias interesadas en impedir el acceso a sus archivos.

La protección de los derechos individuales invocada aquí plantea dos nuevas cuestiones. La primera es si en aquel momento se tomaron precauciones semejantes para proteger a individuos implicados en la recogida de información. La segunda es si es posible aplicar esta «protección» a los archivos de la Guerra de Argelia, ya que solamente desde la *Loi portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité*, de 9 de marzo de 2004, está estipulado que los informadores deban estar registrados, clasificados, grabados, evaluados y remunerados por las autoridades. Los miles de dossiers sobre procedimientos policiales y judiciales seguidos durante la Guerra de Argelia dejan inapelablemente claro que los servicios de inteligencia franceses dependían de una maraña extremadamente detallada de redes sobre el terreno en la que los oficiales de inteligencia, generalmente franceses, se diferenciaban de los agentes, informadores autónomos y «voluntarios», que por lo general eran argelinos.

al periodo 1958-1962. Con este propósito se me otorgó una exención general para la colección (series 15 275) a tenor de un criterio individual, como autorizaba la ley. Desde la aprobación de la denominada exención general, cada dossier tiene que ser examinado por un archivero antes de ser autorizada su consulta para controlar si se halla incluido o no en alguno de los apartados excluidos, lo cual alarga los tiempos para su consulta y crea además incertidumbre. Actualmente, ya no es posible efectuar un estudio de conjunto de los documentos de estos archivos.

Si las identidades de los agentes de seguridad franceses quedan protegidas, entonces como ahora, ya que los archivos de la Direction de la Surveillance du Territoire relativos a la Guerra de Argelia no han sido depositados en los Archivos Nacionales, la identidad de los argelinos fue utilizada sin prestar demasiada consideración a los riesgos que corrían en aquel momento y frecuentemente pueden ser identificados en la actualidad²³. Los dosieres revelan como se «manipulaba» a un informador, cómo a otro «se le consideraba de confianza» o «se le ponía a prueba». La utilización de seudónimos y el anonimato de las actas procesales puede haber ayudado a protegerles de los riesgos. De todos modos, la lista de argelinos asesinados en suelo francés por ser informadores de la policía ofrece una medida de la cantidad de ellos que fueron sacrificados. Dado que cientos de estas muertes quedaron registradas, tienen importancia estadística; y ya que en los informes aparecen sus nombres, constituyen una realidad humana individualizada.

Así, Boubekeur M., amenazado por el FLN por haber informado sobre los recaudadores de fondos de la organización, fue localizado tras su llegada a Rennes e inmediatamente trasladado a la sede de la Brigade de Surveillance du Territoire, donde los agentes le pidieron que se infiltrara en la «colonia norteafricana» de Lorient, una ciudad costera «favorable a las actividades antinacionales»²⁴. Los archivos registran sus encuentros regulares con oficiales de inteligencia en lugares públicos, pero «suficientemente discretos como para que ninguno de los norteafricanos de la ciudad pudiera sospechar una conexión»; la eliminación de documentos que pudieran comprometer su seguridad personal; el pago en efectivo. El informador fue útil hasta que faltó a una cita. Boubekeur fue encontrado muerto apenas un mes después de empezar su tarea.

Un informador oficial, Boualem B., era un antiguo militante del FLN que se convirtió en dirigente de las fuerzas de choque del MNA en Lyon, conocido por la exactitud y calidad de la información que pasaba a sus superiores, no solo sobre el FLN sino también sobre el MNA²⁵. Acusado

²³ La Direction de la Surveillance du Territoire transfiere regularmente archivos relativos a la Segunda Guerra Mundial a los Archives Nationales, pero no estos dosiers operativos.

²⁴ AN 19880446/14/11, dossier 1355, Commissaire de police judiciaire au chef du SRPJ à Rennes, 17 de febrero de 1960.

²⁵ ADR 248W195, dossier Boualem B., note de renseignement, Lyon, 14 de junio de 1961. Archives de la Justice Militaire (AJM), TPFA de Lyon, Judgement 193, 23 de septiembre de 1960.

de asesinato, Boualem obtuvo un certificado médico falso que le sirvió de coartada; inusualmente, el fiscal decidió «dejar el caso en manos de la sabiduría del tribunal». Sin embargo, tras su liberación, Boualem recibió un tiro en la nuca a manos de un asesino con experiencia, un ejemplo final entre muchos otros²⁶. El 26 de septiembre de 1961, el cuerpo de uno de sus agentes —también jefe de la sección del FLN en Vichy— fue descubierto por oficiales de la Brigade de Surveillance du Territoire de Lyon. Una nota mal redactada adornada con una calavera estaba grapada a su cuerpo: «Muerto por el FLN. Un traidor. Merecía la muerte desde hoy. Aquellos que traicionen acabarán como él. *Vive la Libération algérienne*»²⁷.

El hecho es que los servicios de inteligencia y los oficiales de policía franceses no se molestaban mucho en proteger a sus informadores. Un argelino se quejaba de que había sido señalado como informador después de que el registro policial de su café tardara demasiado poco tiempo en encontrar un depósito de armas oculto en el mismo; poco después fue herido²⁸. Otra agente, que se unió al FLN para vengar el asesinato de su padre por un comando de la organización, fue acusada de «transportar y poseer armas de categoría 1», después de que hubiera ayudado a realizar docenas de arrestos, pero su llamativa ausencia el día de la audiencia —había sido advertida por el juez instructor de que se esfumara— condujo a su desaparición. Un abogado la presentó como una «informadora de la policía», la historia salió en la prensa y fue asesinada poco después²⁹.

Un artículo en *L'Humanité* sobre el golpe gaullista del 13 de mayo de 1958 daba el nombre y dirección de «un gran amigo de la Direction de la Surveillance du Terroire de Toulouse», lo que le convirtió en un objetivo inmediato³⁰. La policía y los servicios de inteligencia parecían eludir toda responsabilidad y carecer de cualquier conciencia moral, cuando sus informadores caían. Una entrada dice: «K. era un informador de la Direction de la Surveillance du Terroire de Toulouse. Su actividad

²⁶ Véase, por ejemplo, la video-lectura de Mohamed Harbi sobre el «*affaire Mourad*», otro informador del FLN que fue asesinado: «49—L'affaire Mourad», en *Pour une histoire critique et citoyenne—le cas de l'histoire franco-algérienne*, Canal-U, 21 de junio de 2006.

²⁷ AN 19880509/4/1, dossier 3226, Officier de police au chef du SRPJ à Clermont Ferrand, 21 de noviembre de 1961.

²⁸ APPP H63, dossier Mohamed A., Le capitaine Montaner au directeur du SCAA, 30 de agosto de 1961.

²⁹ AN 19880446/9/1, dossier 919, Officier de police principal au chef du SRPJ, París, 21 de diciembre de 1959.

³⁰ *L'Humanité*, 9 de julio de 1958.

política le marcó como un objetivo para los nacionalistas argelinos». Otra señala que la calidad de los informes de un informador «le señalaba como blanco de la venganza de los dirigentes locales del FLN»³¹. Sin más comentarios ni rastro de culpa.

Los dossiers recopilados por los fiscales durante la Guerra de Argelia, distribuidos por varios archivos, están llenos de descripciones de los métodos utilizados para obtener información y preparar operaciones que, mientras no se demuestre lo contrario, podemos asumir que siguen utilizándose. Cuando un *pied-noir* que hablaba árabe, detenido en el departamento de Ardèche en la ciudad de Privas, oyó a un prisionero del FLN hablar sobre un doble asesinato que estaba sin resolver e informó al fiscal, los agentes contactaron con él para trazar la cadena de mando y detener a los culpables; su información fue «del máximo interés»³². Un militante del MNA, informador retribuido sobre la «brigada norteafricana» en Saint-Étienne, envió desesperadas cartas desde el dormitorio de la cárcel, diciendo que había sido identificado por otros reclusos que querían cortarle el cuello.

Entonces como ahora, la cárcel era un lugar privilegiado para la recogida de información. El traslado de informadores de una región a otra, los discretos encuentros en un banco público o cerca de una fuente, la recolección de datos, el rastreo de redes, los fondos ilegales: todos estos fundamentos de la vigilancia aparecen descritos con detalle en los archivos, igual que los conflictos entre los propios servicios de inteligencia.

A pesar de la exclusión del *Arrêté* de 22 de diciembre de 2021 y de la *Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement*, estos archivos todavía pueden consultarse³³. Ciertamente, muchos de los informadores han sido asesinados –la muerte abre los archivos– pero muchos otros han sido heridos o aparecen en la fase de investigación de un fiscal. En esos casos, la ley es impracticable. En primer lugar, para

³¹ AN 19880446/4/1, dossier 323, Officier de police au chef du SRPJ à Lyon, Annecy, 28 de febrero de 1959.

³² AN 19880446/13/1, dossier 1239, Officier de police au chef du SRPJ à Montpellier, 31 de marzo de 1960.

³³ La *Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement* establece que los documentos, que detallan «procedimientos operativos» pueden mantenerse fuera del conocimiento público. Véase el documento remitido a los senadores por el colectivo Accès aux archives publiques, 5 de junio de 2021, respecto a la ampliación del retraso en acceder a archivos públicos contenido en el Artículo 19 de la mencionada *Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement*.

que fuera funcional, un archivero tendría que recorrer abundantes expedientes para atender cada solicitud y verificar el «valor operativo» de la información relativa al servicio de inteligencia que corresponda. Esto no es ni deseable ni posible y claramente acarrea el peligro de que se produzcan diferentes evaluaciones entre un centro archivístico y otro³⁴. En segundo lugar, mientras el *Arrêté* de exclusión podría aplicarse a las colecciones mantenidas en archivos departamentales o nacionales, los contenidos de estos dosieres ya han circulado libremente; se encuentran copias en los miles de documentos recopiladas por fondos de seguros sociales, que prestan ayuda a las reclamaciones de pensiones hechas por las familias de informadores o supervivientes. En 1960 se redactó un procedimiento especial para ayudar a los solicitantes de pensiones que, «aunque parecen haber actuado en connivencia con los rebeldes, son de hecho leales servidores de Francia»³⁵. La conclusión es que el argumento de «la protección de la privacidad individual» ha sido puesto patas arriba, ya que, en contra de la totalidad de las declaraciones de intenciones, el *Arrêté* de 22 de 2021 revela la falta de protección otorgada a las «personas citadas o fácilmente identificables implicadas en actividades de inteligencia». Por lo menos para los argelinos.

¿Privacidad sexual?

¿Qué decir de la tercera causa de exclusión aplicada a documentos, cuya divulgación «infringiría la privacidad de la vida sexual de una persona», una cuestión que, como en los otros dos casos, se aplica a un número en absoluto despreciable de dosieres? Los documentos relacionados con procedimientos legales a menudo incluyen informes de expertos médicos, diagnosticando condiciones mentales o físicas susceptibles de ser relevantes para la responsabilidad del acusado, en ocasiones proporcionando circunstancias atenuantes o motivos para un internamiento psiquiátrico, pero también someten a escrutinio la vida sexual del acusado. Un ejemplo: «Soltero, sin relaciones estables con mujeres, sexualmente normal, solamente tiene relaciones venales»³⁶. Otro más:

³⁴ Sobre esto, véase N. Wagener, «Les glissements du droit d'accès aux archives publiques», cit.

³⁵ La circular confidencial núm. 379, continuaba: «Este podría ser el caso para los nacionales franceses de ascendencia norteafricana, cuyas informaciones pudieron ser utilizadas por autoridades administrativas o servicios policiales gracias a su afiliación a una organización antinacional», AN, F-1A-5130. *Ministre de l'Intérieur aux Préfets (Métropole)*, París, 16 de agosto de 1960.

³⁶ AJM, TPFA de Lyon, *Judgement* 186/2386 del 11 de mayo de 1959.

«Afirmaba haber tenido relaciones sexuales durante tres años, pero niega cualquier enfermedad venérea»³⁷.

Además, los documentos sobre investigaciones penales tienen abundante información sobre las relaciones conyugales o extramatrimoniales de los interrogados. No por su propia seguridad, sino porque la investigación exigía a la policía supervisar los movimientos de las víctimas y de los sospechosos al minuto para formular una hipótesis sobre el motivo: ¿crimen, pasión, política? En los cuatro mil documentos recopilados por el Service Régional de Pólice Judiciaire entre 1958 y 1962 relativos a muertes violentas en Francia vinculadas con la Guerra de Argelia hay rastros de cerca de cuatrocientas parejas, algunas legítimas, otras furtivas, verificables en la población inmigrante atrapada en la guerra. Fugaces coqueteos, sexo extramarital en hoteles o al aire libre, parejas que se formaban o se rompían: la sexualidad estándar de la década de 1950 está bien documentada en los archivos cubiertos por el *Arrêté* de 22 de diciembre de 2021.

En los dosieres también se encuentran evidencias de violencia sexual, aunque detectarla exige una mirada entrenada, ya que los investigadores apenas le prestaban atención. De manera más general, la vida sexual se vincula con cuestiones de privacidad, intimidad y confidencialidad médica, tres conceptos que no cuentan con una definición legal³⁸. Los documentos médicos a menudo parecen registros sanitarios: un acusado, durante su examen médico-psicológico, «niega haber tenido ninguna enfermedad importante, pero menciona haber sufrido disentería y malaria en Indochina, dolencias de las que ahora está totalmente curado». Otro describe haber tenido otorrea crónica desde 1954³⁹. Una mirada más detenida a los informes médicos hace que nos preguntemos si, de hecho, no revelan más sobre la estructura represiva de la sociedad que sobre las vidas privadas de sus sujetos. Estos momentos de intervención del médico están políticamente cargados para ambas partes, moviéndose entre la imposición de un diagnóstico y la resistencia a un juicio tendencioso. Algunos acusados se negaban en redondo a someterse a una valoración médica: «Un poco receloso y reservado, [él] no veía razones para ser examinado por un psiquiatra». En otro caso, «el examen

³⁷ AJM, TPFA de Lyon, Judgement 69 del 7 de junio de 1961.

³⁸ S. Combe, *Archives interdites*, cit., p. 125; Sébastien-Yves Laurent, *État secret, État clandestine: Essai sur la transparence démocratique*, París, 2024, pp. 113-115.

³⁹ AJM, TPFA de Lyon, Judgement 69 del 7 de junio de 1961; AJM, TPFA de Lyon, Judgement 2/2893 del 12 de enero de 1961.

es difícil por el hecho de que no hace ningún esfuerzo por responder a las diferentes pruebas». Salah Khalef dio una breve respuesta, utilizando el vocabulario escogido por la burocracia médica: «Tengo buena salud, nunca he dado señales de desequilibrio mental»⁴⁰.

Para otros, el examen médico es una oportunidad para registrar las consecuencias de la violencia policial. Un miembro del FLN describe haber sufrido puñetazos, golpes con varas en las plantas de los pies y haber recibido descargas eléctricas⁴¹. El informe sobre un partidario del MNA dice: «Fue llevado a las instalaciones policiales en la calle Vauban donde dice que fue golpeado. Se le puso una barra de hierro entre sus codos y rodillas y quedó colgado de ella. A continuación, fue golpeado en la cabeza, el pecho y las plantas de los pies». En ambos casos, el examen confirmó la evidencia de violencia policial: heridas en el cuero cabelludo, costillas rotas y múltiples lesiones resultado de la utilización de instrumentos y puños. Pero a menudo, el examen médico no se producía hasta varios meses después de las sesiones de tortura. Para algunos acusados, podía remover memorias de terror de otras guerras coloniales, como para un compañero de Salah Khalef, que había caído prisionero en Diên Biên Phu. Pero los archivos también documentan el peaje pagado por un tratamiento racista diario, tanto en Argelia como en Francia. Un militante del FLN, que «explica sin odio sus ideas y actividades políticas anteriores a los ataques», también señalaba que «en la escuela sufría el racismo de sus compañeros de la Francia continental»: «Ha conservado un cierto rencor»⁴². Finalmente, si todos los archivos judiciales que contienen información médica tienen que permanecer inaccesibles, entonces –como sucede con los agentes de inteligencia que sean identificables– los archiveros tendrán que revisar la totalidad de cada dossier antes de ponerlo a disposición del público.

El oficio de historiador

Estas tres restricciones analizadas aquí están todas ellas relacionadas con cuestiones de privacidad. La totalidad de los estudios relacionados con archivos «sensibles» describen el equilibrio –o la tensión– existentes entre la necesidad de apertura y el igualmente necesario respeto por

⁴⁰ AJM, TPFA de Lyon, Judgement 113/2709 del 23 de mayo de 1960; AJM, TPFA de Lyon, Judgement 93/1961 del 19 de mayo de 1961; AJM, TPFA de Lyon, Judgement 2/2893 del 12 de enero de 1961.

⁴¹ AJM, TPFA de Lyon, Judgement 69 del 7 de junio de 1961.

⁴² AJM, TPFA de Lyon, Judgement 113/2709 del 23 de mayo de 1960.

los individuos, porque la utilización de ese material se encuentra en el cruce de problemáticas jurídicas, éticas y epistemológicas⁴³. El caso concreto de la Guerra de Argelia y sus archivos impone nuevas cuestiones. Surge el tema de si resulta pertinente involucrarse en los debates planteados por dosieres de derecho común, tales como la evidencia de una paternidad irregular, a menudo sin el conocimiento del niño. Se sostiene, por otro lado, el argumento de que el respeto por la privacidad ya está consagrado por la ley, haciendo que cualquier medida nueva sea superflua. El historiador puede tener reparos de conciencia: «¿con qué derecho tiene conocimiento de estos secretos?», «¿no se convierte en un ladrón de la privacidad de otras personas?»⁴⁴. Pero los historiadores también pueden afirmar que su oficio consiste en no dar marcha atrás nunca ante un sujeto o un documento, en trabajar metódica, rigurosa y meticulosamente.

El oficio requiere reglas bien fundamentadas. Si tomamos la cuestión del anonimato, vemos que no aparece en la legislación archivística francesa, pero está consagrada en el Artículo 66 de la Constitución, que convierte en un deber de la autoridad judicial, no de la Administración, proteger la vida privada de los ciudadanos⁴⁵. En este ámbito, las posiciones historiográficas oscilan entre tres polos. El primero es hacer que todo sea anónimo y no dar ninguna indicación sobre la identidad de los individuos mencionados en los documentos archivados. Este es el planteamiento adoptado, por ejemplo, con el trabajo de archivo sobre hijos ilegítimos.

El segundo planteamiento apuesta por dar nombres, criterio aplicado sobre todo en el caso de los archivos de la Segunda Guerra Mundial, donde mantener el anonimato servía para proteger el «honor» de antiguos agentes del régimen de Vichy, así como de criminales de guerra que continuaron tranquilamente sus carreras en los más altos escalafones del Estado después de la amnistía. El tercer planteamiento es proceder caso por caso, lo cual supone que quienes estaban allí en el momento de los hechos sostengan sus experiencias y los historiadores entiendan que las dinámicas sociales y políticas no surgen de una indistinta masa anónima, sino de las biografías de los individuos.

⁴³ Ivan Jablonka, citado en la introducción a la obra de Ludivine Bantigny y Jean-Claude Vimont (eds.), *Sous l'œil de l'expert: Les dossiers judiciaires de personnalité*, Rouen, 2011, p. 10.

⁴⁴ Cuestiones planteadas por Ivan Jablonka en «L'historien, exploitateur d'archives», *ibid.*, pp. 17-18.

⁴⁵ S. Combe, *Archives interdites* cit., p. 137.

Este es el planteamiento generalmente utilizado por los historiadores de la Guerra de Argelia, especialmente porque el acceso a muchos documentos, como los del sistema judicial militar, depende de nombres concretos. En su momento, desde luego, la «discreción» se utilizó principalmente para encubrir las acciones ilegales del Estado más que para resguardar la vida privada de los individuos, cuyas identidades fueron a menudo publicadas por la prensa en la estela de los juicios y de los escándalos. En este ensayo, por ejemplo, se han tomado en consideración un cierto número de parámetros, incluyendo el anonimato de toda la información sobre la actividad sexual o los detalles que podrían producir angustia a las familias, como la revelación de denuncias, o confrontaciones con los vivos.

En el caso de Salah Khalef, repetidas entrevistas se basaron en un método que combinaba las memorias personales con la evidencia de los documentos del momento. Otro entrevistado, Didier Poiraud, un objetor sentenciado por desobedecer órdenes, por insubordinación y por desertión, se reía del informe médico que le definía como «paranoide, pero sin alteración de las facultades mentales», basándose en la ironía de sus respuestas⁴⁶.

Reversiones

Así pues, las restricciones impuestas sobre los archivos de la Guerra de Argelia dan testimonio de la incapacidad del régimen para asumir su pasado, a pesar de pequeños pasos adelante⁴⁷. Si comparamos la *Freedom of Information Act* estadounidense, aprobada en 1967 en el momento álgido de la guerra de Vietnam, con la *Loi n° 78-753 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal*, de 17 de julio de 1978, conocida como la ley de información francesa, constatamos lo limitada que es esta última, a pesar de todas las excepciones aplicadas en Estados Unidos⁴⁸. Mientras que Vietnam ya no divide a los estadounidenses, la

⁴⁶ M. André, «Salah Khalef, un condamné à mort préférant l'histoire à la mémoire», cit.; entrevista del autor con Didier Poiraud, Montcuq, 18 de julio de 2018.

⁴⁷ Los avances incluyen la legislación de 1999, que calificaba los «acontecimientos» en Argelia como una guerra y reconocía la responsabilidad del Estado francés por la masacre del 17 de octubre de 1961, más de medio siglo después, el 17 de octubre de 2012.

⁴⁸ Tom McClean, «Why the French FOIA “Failed”», *Journal of International Media & Entertainment Law*, vol. 7, núm. 1, 2016-2017.

Guerra de Argelia todavía levanta las mismas pasiones que antaño en Francia. La cautelosa gestión de los archivos también da fe de un Estado que moviliza la guerra y sus archivos a la búsqueda de lo que Macron denominaba con propósitos electorales y diplomáticos y con voluntad de atacar al gobierno argelino, *la rente mémorielle*, esto es, el deseo de lucrarse con la memoria⁴⁹.

Desde hace algunos años, historiadores, juristas y archiveros han entrado en conflicto con el Estado francés a cuenta del acceso a estos archivos. Enfrentados a la liberalización engañosa ofrecida por el *Arrêté* de 22 diciembre de 2021, inicialmente hubo tres razones que propiciaron el silencio. La primera, hay que admitirlo, fue la magnitud de la fanfarria mediática que saludó el anuncio y que anestesió a las mentes críticas. La segunda es que para medir el impacto de la nueva normativa se necesitaba un conocimiento detallado de los archivos policiales y judiciales. Finalmente, el silencio puede explicarse por el triple énfasis del *Arrêté* sobre el respeto al individuo –la protección de la minoría de edad legal, de agentes de inteligencia y de la vida sexual y médica– que también tuvo un efecto anestésico, a pesar del hecho de que esas cuestiones ya estaban recogidas por la ley. Aquí como en todas partes, podríamos preguntar si «el respeto por la vida privada puede no ser una coartada conveniente para impedir el conocimiento de partes de la historia en nombre de la *raison d'État*»⁵⁰.

En todo caso, la situación evoluciona. Al final, después de que un artículo en *Le Monde* resaltara algunas de estas contradicciones⁵¹, las autoridades admitieron que la exclusión de los menores era demasiado general y el 25 de agosto de 2023 se publicó un nuevo *Arrêté* que los incorporaba a la «exención general». El hecho de que las otras dos restricciones permanezcan en vigor a fecha de hoy, sirve paradójicamente para resaltar el carácter inviable del *Arrêté* de 22 diciembre de 2021 y así hacer su lógica alineada con la *raison d'État* más transparente. Si «los intereses de la seguridad nacional» han servido hasta ahora para proteger al Estado en detrimento de las libertades individuales, el *Arrêté* de 22 diciembre de 2021 instrumentalizaba eficazmente la protección de los individuos como una pantalla para resguardar la actual *raison d'État*.

⁴⁹ Véase, por ejemplo, Mustapha Kessous, «En France aussi, la guerre d'Algérie est une rente mémorielle», *Le Monde*, 11 de diciembre de 2021.

⁵⁰ S. Combe, *Archives interdites*, cit., p. 131.

⁵¹ M. André, «L'accès aux documents liés à la guerre d'Algérie reste toujours aussi difficile», *Le Monde*, 15 de noviembre de 2022.

Durante la Guerra de Argelia los intereses nacionales se utilizaron para justificar crímenes, mentiras y leyes excepcionales, cuyo resultado general fue pisotear los derechos humanos. En una paradójica inversión de la historia, aquellos que sufrieron la represión, que fueron condenados, ejecutados o manipulados por los que estaban en el poder, ahora tienen derecho a toda la consideración posible. Pero como hemos visto, la consecuencia ha sido, consciente o inconscientemente, dar la vuelta a la *raison d'État* de la guerra. Está claro que la cuestión de Argelia sigue bajo el control del Estado y que los gestos realizados por la «exención general» de diciembre de 2021 –su vacilación sobre si dar el paso de abrir totalmente los archivos– redobla la violencia real de la guerra a través de la violencia simbólica desplegada en el campo de batalla de los archivos. De ese modo, la pregunta que se plantea es cómo liberarnos del control del Estado sobre cuestiones relacionadas con la Guerra de Argelia –un control que ha tenido innumerables consecuencias a la hora de escribir su historia– de manera que aquellos que deseen realizar el trabajo de investigación y memoria puedan hacerlo libremente en el silencio de la sala de lectura y lejos de la trapacería de la instrumentalización política.

Una versión más larga de este artículo fue publicada como «Face à la raison d'État. Un historien dans les archives de la guerre d'Algérie», en 20 & 21. *Revue d'histoire*, núm. 161, enero de 2024, pp. 160-173.

traficantes de sueños

w w w . t r a f i c a n t e s . n e t

C/Duque de Alba 13, 28012. Madrid



Nuestras vidas en sus carteras de inversión

**Cómo los gestores de
activos dominan el mundo**

Brett Christophers

Colección: Prácticas constituyentes

PVP: 25 €

Desde la crisis financiera mundial de 2008, los grandes bancos han pasado a un segundo plano. Hoy, los nuevos amos financieros son gestores de activos con nombres como Blackstone, BlackRock, Brookfield o Macquarie. Estos gigantes, que gestionan inversiones de billones de dólares, ya no solo poseen activos financieros. Las carreteras sobre las que conducimos, las tuberías que nos suministran agua o gas, las tierras de cultivo que nos proporcionan alimentos, los sistemas de energía, los hospitales, las escuelas e incluso las casas en las que vivimos, engrosan cada vez más sus abultadas carteras de inversión.

Los grandes gestores de activos proceden de un modo muy distinto a los antiguos propietarios de viviendas o de otras infraestructuras esenciales. El análisis y conocimiento de este proceso resulta crucial para cualquier actor interesado en democratizar nuestra economía.